

Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintidós

VISTOS:

A folio 1 comparece doña **YUSBLEY MARGARITA AGÜERO ESPINOZA**, trabajadora, cédula nacional de identidad número 26.160.634-8, domiciliada en calle Toro Mazote N° 76 comuna de Estación Central, quién interpone demanda de despido injustificado, cobro de prestaciones, declaración de unidad económica y otros, en contra de 1) **DESARMADURÍA COPIAPÓ Y CÍA. LTDA.**, sociedad del giro de su denominación representada por don Cristián Mauricio Méndez, cédula nacional de identidad N° 12.018.991-3, ambos domiciliados en calle Simón Bolívar N°7233, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago; 2) **SÚPER REPUESTOS SpA**, sociedad del giro de su denominación, representada por don Carlos Felipe González Carreño, cédula nacional de identidad N° 18.738.925-9, ambos domiciliados en calle Simón Bolívar N°7233, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago; 3) **CRISTIÁN MAURICIO MÉNDEZ CARREÑO**, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 12.018.991-3 domiciliado en calle Simón Bolívar N°7233, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago; 4) **CARLOS FELIPE GONZÁLEZ CARREÑO**, cédula nacional de identidad N° 18.738.925-9, domiciliado en calle Simón Bolívar N°7233, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago, y; 5) **SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MENDEZ Y CÍA LTDA.**, sociedad del giro de su denominación, representada por don Carlos Felipe González Carreño, cédula nacional de identidad N° 18.738.925-9, ambos domiciliados en calle Serrano N°699, comuna y ciudad de Santiago.

Indica que tenía una relación laboral mediante un contrato de trabajo suscrito con la demandada Desarmadura Copiapó y Cía. Ltda., desde el día 3 de noviembre de 2017 aunque en su finiquito se señala que esta habría comenzado el día 1 de marzo de 2018, y que realizaba funciones de cajera. Señala que su remuneración ascendía a la suma de \$637.425, pues existían \$100.000 que no se reflejaban en sus liquidaciones de sueldo.

Expone que fue despedida el día 30 de mayo de 2020 por la causal de necesidades de la empresa cuya carta se basaba en la reestructuración de la compañía, no cumpliendo la misma con los requisitos mínimos de fundamentación exigidos por la norma. Señala que con fecha 12 de junio de 2020 firmó finiquito, reservándose el derecho para reclamar las prestaciones que ahora solicita y que se le adeudarían diferencias por indemnización sustitutiva del aviso previo, años de servicio, vacaciones legales y proporcionales, y además solicita la devolución del descuento de AFC.

En cuanto a la unidad económica, expone que todas las demandadas constituyen un grupo económico siendo un solo empleador para efectos laborales, y en consecuencia la responsabilidad que se solicita recae sobre todas las demandadas. Indica que en las oficinas de calle Serrano donde se desempeñó prestan funciones también las empresas demandadas Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Ltda., y Súper Repuestos SpA, recibiendo instrucciones de todas las demandadas, y debiendo usar uniforme de su empleador y las 2 sociedades recién señaladas, llegando incluso a pagar sus cotizaciones una de ellas. Señala que además las sociedad realizan operaciones jurídicas de entrega de cauciones personales entre ellas. En toda esta operación también figuran los demandados



Cristián Méndez Carreño y Carlos González Carreño, que son dueños de los derechos sociales de esta estructura societaria.

Finalmente previas citas legales, solicitan además de la declaración de unidad económica, el pago de las prestaciones laborales que en la demanda se indican.

A folio 9 consta la notificación realizada a la Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Ltda.; a folio 10 la practicada a don Cristián Méndez Carreño; a folio 12 la realizada a don Carlos González Carreño; a folio 14 la notificación válida realizada a Desarmaduría Copiapó Ltda., y por último, a folio 15 la realizada a Súper repuestos SpA.

A folio 17 con fecha 17 de febrero de 2021 compareció doña Paulina Figueroa Villanueva en representación de todas las partes demandadas solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes. Señala que la demandante comenzó a prestar servicios el día 31 de marzo de 2018 con carácter indefinido, y no antes, pues en noviembre de 2017 solo se le entregó una carta compromiso de trabajo para la actora, y los servicios solo comenzarían una vez que obtuviera su permiso de trabajo, lo que ocurrió en febrero de 2018 y en consecuencia comenzó a prestar servicios en marzo de dicho año. Señalan que la remuneración de doña Yusbely ascendía solo a \$537.425 y ninguna suma mayor.

Indica que el despido se debió realizar por la grave situación financiera de su representada Desarmaduría Copiapó que sufrió los efectos del estallido social y luego de la pandemia, ya que debió cerrar al no ser considerada una empresa esencial, lo que llevó a que entre mayo y junio de 2020 la sociedad recién señalada debió prescindir de muchos de sus trabajadores, preocupándose de pagar de forma íntegra su finiquito.

Asume la contestación que la carta puede tener falencias de información pero indica que se debe a que se tuvo que prescindir de la asesoría letrada para privilegiar el pago de finiquitos. Expone que la demandante trabajó únicamente para Desarmaduría Copiapó, y que en caso alguno debería ser parte de este proceso don Carlos González y don Cristián Méndez, y que la actora no prestaba servicios para un holding. Indican por último que los abogados patrocinantes habrían incumplido el Código de Ética al incurrir en sollicitación y buscar clientes de su empresa.

Previas citas legales y jurisprudenciales sobre la unidad económica, solicitan se rechace la demanda en todas sus partes por la improcedencia de las prestaciones, no existir unidad económica y no configurarse la nulidad del despido.

A folio 41 con fecha 24 de febrero de 2021 se realizó la audiencia preparatoria en estos autos, donde consta que llamadas las partes a conciliación, esta no prosperó.

A folio 114 con fecha 11 de enero de 2022 se realizó la audiencia de juicio.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña Yusbely Margarita Agüero Espinoza, quién interpone demanda en contra de las sociedades Desarmaduría Copiapó y Cía. Ltda., Súper Repuestos Spa, Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Ltda., y de en contra de los señores Cristián Mauricio Méndez Carreño, y don Carlos Felipe González Carreño, solicitando que



se les declare unidad económica a todas las demandadas y que ella habrían incurrido en subterfugio, y se declare que su despido fue injustificado, accediendo a las prestaciones e indemnizaciones que reclama junto a la nulidad del despido;

SEGUNDO: Que compareció doña Paulina Figueroa Villanueva en representación de todas las partes demandadas solicitando el rechazo de la demanda en todas sus partes, negando la fecha de ingreso a trabajar de la actora, su remuneración, que el despido sea injustificado, y que las demandadas constituyan una unidad económica;

TERCERO: Que en este contexto, la controversia jurídica que corresponde dilucidar en estos autos, dice relación con determinar si el despido de que fue objeto la actora es o no justificado, las consiguientes prestaciones que de ello se desprenderían junto a la base de cálculo sobre la que deberán determinarse, y si las demandadas constituyen o no una unidad económica;

CUARTO: Que para acreditar sus dichos en autos, la parte demandante incorporó la siguiente prueba documental: 1) Copia de contrato de trabajo suscrito por la demandante y Desarmaduría Copiapó y Cía. Ltda.; 2) Cartola Histórica Cuenta RUT N° 0026160634, que comprende el período de tiempo desde 3 de febrero del año 2020 al 23 de marzo del año 2020; 3) Cartola Histórica Cuenta RUT N° 0026160634, que comprende el período de tiempo desde el 23 de marzo del año 2020 al 17 de abril del año 2020; 4) Cartola Histórica Cuenta RUT N° 0026160634, que comprende el período de tiempo desde el 20 de abril del año 2020 al 04 de mayo del año 2020; 5) Conversaciones de Whatsapp entre la demandante y el demandado Carlos González Carreño, en el período de tiempo que comprende 20 de agosto del año 2019 y 12 de junio del año 2020; 6) Consulta Situación Tributaria de Terceros de Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Limitada, fecha de consulta 6 de julio del año 2020; 7) Consulta Situación Tributaria de Terceros de Cristián Méndez Carreño, fecha de consulta 6 de julio del año 2020; 8) Consulta Situación Tributaria de Terceros de Súper Repuestos SpA, fecha de consulta 6 de julio del año 2020; 9) Consulta Situación Tributaria de Terceros de Desarmaduría Copiapó y Cía. Limitada, fecha de consulta 19 de febrero del año 2021; 10) Liquidaciones de sueldo de la demandante correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2020; 11) Finiquito suscrito por la demandante y Desarmaduría Copiapó y Cía. Ltda., con reserva de derechos; 12) Copia de escritura de constitución de Desarmaduría Copiapó y Cía. Ltda.; 13) Copia de Inscripción en el registro de propiedad de fojas 6617 número 9435 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2018, emitido con fecha 2 de abril del año 2018; 14) Fotografías de poleras de Desarmaduría Copiapó y Cía. Limitada y de Súper Repuestos SpA; 15) Escritura pública de fecha 15 de diciembre del año 2017, otorgada ante el notario público don Iván Torrealba Acevedo; 16) Certificado de pago de cotizaciones previsionales, de fecha 29 de mayo del año 2020, de los meses de marzo y abril del año 2018; 17) Balance clasificado del año 2019 y balance general del año 2020 ambos de la demandada Super Repuestos SpA; 18) Estatuto actualizado de Super Repuestos SpA de fecha 20 de febrero del año 2021. 19) Carta de despido de la demandante.



Además, la parte demandante generó la declaración testimonial de los señores Francisco Javier Hernández y don Kevin Canelón González, quienes previamente juramentados declararon en la audiencia de juicio;

QUINTO: Adicionalmente, la parte demandante incorporó las repuestas de los oficios enviados a AFC Chile, FONASA y AFP Plan Vital, solicitó la reproducción del audio de 14 segundos que se individualiza bajo el registro Audio PTT-20200513-WA0001, y solicitó tener a la vista las causas RIT T-1074-2020 y O-4921-2020 ambas del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Solicitó además la exhibición de los contratos de cuenta corriente mercantil a que se hace mención en la prueba documental ofrecida por las demandadas con empresas relacionada, documentación que no fue exhibida, por lo cual solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 453 N° 5;

SEXTO: Que las partes demandadas incorporaron al juicio la siguiente prueba documental con el objeto de acreditar sus dichos: 1) Promesa de Contrato de trabajo entre doña Yusbely Agüero Espinosa y Desarmaduría Copiapó Limitada, de noviembre de 2017; 2) Comprobante de pago de remuneraciones de los meses de enero, febrero, marzo y abril 2020; 3) Comprobante de pago de finiquito de doña Yusbely Agüero; 4) Finiquito de doña Yusbely Agüero con Desarmaduría Copiapó Limitada; 5) Liquidaciones de sueldo de doña Yusbely Agüero, correspondiente a los meses de enero a abril 2020,y; 6) Informe "Estado de Resultados" de Desarmaduría Copiapó Limitada de enero a agosto 2020.

Además, generaron la absolución de posiciones de la actora la señora Agüero Espinoza, quién declaró conforme a las preguntas realizadas en autos. Generaron también la declaración como testigo, de don Edgar Rojas Araujo, quién declaro bajo juramento en la audiencia de juicio.

Asimismo, incorporaron las repuestas de oficios emitidas por AFC Chile, FONASA y AFP Plan Vital, y solicitaron se tuviera a la vista las causas RIT O-4889-2020 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El tribunal, de oficio, solicitó informe a la Dirección del Trabajo para efectos de la unidad económica, conforme al tenor del artículo 3° del Código del Trabajo, el que fue evacuado por esta institución;

SÉPTIMO: Que, apreciada la prueba acompañada conforme a las reglas de la sana crítica, según dispone el artículo 456 del Código del Trabajo, considerando la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de la misma, es posible determinar que:

1.- Doña Yusbely Agüero Espinoza, celebró un contrato de trabajo con fecha 3 de noviembre de 2017. Esto se desprende la copia del contrato de trabajo acompañada por ambas partes, fechado el día 7 de noviembre de 2017 y autorizado ante el Notario de la 30° Notaria de Santiago con fecha 15 de noviembre de 201, documento que además la parte demandada reconoce en su contestación catalogándola como una promesa de contrato de trabajo.



2.- El contrato antes señalado indicaba en su cláusula séptima que la trabajadora comenzaba a prestar servicios con fecha 3 de noviembre de 2017 y la cláusula octava contemplaba una cláusula denominada “Cláusula de Vigencia” que señalaba que la obligación de prestar servicios solo comenzaba a regir una vez que la trabajadora hubiera obtenido el correspondiente permiso para trabajar en nuestro país. Todo lo anterior consta del tenor literal de las cláusulas ya señaladas del contrato mencionado en el numeral anterior.

3.- Al ser despedida el día 31 de mayo de 2020, la demandada Desarmaduría Copiapó y Cía. Ltda., adujo para justificar la causal de necesidades de la empresa utilizada, las circunstancias fácticas de “Necesidades de la empresa por reestructuración de la compañía”. Ello, conforme se desprende de la carta de despido de fecha 30 de mayo que en su tenor literal, para justificar la causal aplicada, indica expresamente lo ya reseñado.

4.- La actora tenía una remuneración bruta mensual ascendente a \$537.425 lo que se desprende de la liquidación de remuneraciones acompañadas por ambas partes de los meses de enero de 2020 a abril de 2020 meses trabajados completos por la actora y en los cuales figura idéntica suma por total haberes de dichos meses trabajados.

5.- La demandante señora Agüero recibía instrucciones de su jefatura destinadas a realizar labores de las demandadas Desarmaduría Copiapó Ltda., Súper Repuestos SpA y Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Ltda. Lo anterior se acredita con los dichos de los testigos Francisco Javier Hernández y Kevin Canelón. El primero por cuanto indica en su declaración testimonial que la demandante era la secretaria de todas las empresas y veía la parte administrativa, que eran varias empresas y todas funciona como una sola. Por su parte el testigo señor Kevin Canelón señala que vio a la actora trabajando en los locales de Super Repuestos y Desarmaduría Copiapó, que todas las empresas pedían repuestos.

Además, esto se ve corroborado por la conversación de la red social Whatsapp acompañadas por la parte demandante que abarcan el período de 20 de agosto de 2019 a 12 de junio de 2020, en las cuales la actora se comunica con una persona denominada “Felipe Jefe”, - que bien podría tratarse del demandado don Carlos Felipe González Carreño por identificarlo como jefe de ellos y de la actora los deponentes señores Francisco Hernández y Kevin Canelón, aunque incluso en caso de no ser él, del tenor de las conversaciones se acredita que daba instrucciones a la demandante - en las cuales dicha jefatura le da instrucciones indistintas destinadas a realizar actividades para las tres sociedades demandantes.

Así, de modo ejemplar, el día 3 de septiembre de 2019, Felipe Jefe le pregunta a Yusbely si cuenta con poleras de Súper Repuestos y ella le indica que no tiene nada de uniformes y el mismo día le pregunta que como pueden hacer para que el persona de Valdés marque asistencia, a lo que ella le pregunta si no estaban marcando en la Desarmaduría, a lo que él le responde afirmativamente pero como irá un vendedor nuevo se hace necesario que le compren un libro de asistencia, el que dejarán en dependencias de Desarmaduría. Asimismo, el día 19 de noviembre de 2019 Felipe Jefe le solicita que le envíe los datos consistentes en “rut y eso” de Sociedad Automotriz. El día 19 de diciembre



del mismo año, Felipe Jefe le pregunta a la actora cuantas personas hay en “super” (sic) – en clara referencia a la sociedad Súper Repuestos – y que le envíe el listado de ellas. Posteriormente el día 2 de enero de 2020 le pregunta su jefe a Yusbely si le han llegado facturas, a lo que ella contesta que de Super repuestos no, pero que de Desarmaduría Copiapó o de Sociedad Automotriz sí tenía, y él le pide que le envíe. El día 17 de enero de 2020 se le solicita que factura un monto de Sociedad Automotriz a Súper Repuestos, la que debía corresponder al concepto “repuestos focus 2018”, posteriormente ese día cuando le preguntan si está hecha la factura señala que no pues no tenía folios de Automotriz. El 27 de enero le solicitan que envíe el rut de Super Repuestos a una persona. Por último, en esta enumeración ejemplar, con fecha 27 de enero de 2020 se le solicita que realice la portabilidad de los números de Super Repuestos de la compañía Claro a Movistar, que avise al personal que se realizará ello.

Como se señaló, ellas son algunas de las múltiples referencias que hay en las conversaciones a instrucciones relacionadas con las 3 empresas demandadas que acreditan lo ya señalado.

6.- La actora recibía pagos de la sociedad Súper Repuestos SpA., conforme se desprende las cartola histórica de cuenta RUT N° 0026160634, que comprende el período de tiempo desde 3 de febrero del año 2020 al 23 de marzo del año 2020 y la que abarca desde el día el 23 de marzo del año 2020 al 17 de abril del año 2020. Consta además en ella una transferencia realizada el día 17 de abril de 2020 una transferencia realizada a la actora por don Carlos Felipe González Carreño.

7.- Las cotizaciones previsionales de la actora de los meses de marzo y abril de 2018 le fueron pagadas a la actora por la Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Ltda., conforme dan cuenta los certificados de pagos de cotizaciones previsionales recepcionados vía oficio desde AFC Chile, AFP Plan Vital y Fonasa, además del certificado de Previred acompañado por la actora.

8.- No existe pago de ninguna cotización de seguridad social ya sea de fondo de pensiones, salud y seguro de cesantía entre los meses de noviembre de 2017 y febrero de 2018, así como tampoco existe ningún pago de cotización previsional de salud desde el mes de mayo de 2018 hasta el término de la relación laboral. Esto, conforme dan cuenta los certificados de pagos de cotizaciones previsionales recepcionados vía oficio desde AFC Chile, AFP Plan Vital y Fonasa;

OCTAVO: Que así las cosas, el despido de que fue objeto la actora deberá necesariamente ser calificado como un despido injustificado por cuanto la única circunstancia fáctica invocada para justificar el mismo dice relación con la indicación a la “reestructuración de la compañía”, lo que no explicita ni en forma mínima una circunstancia fáctica concreta que permita a la demandante saber porqué motivo la están desvinculando, pues no se señala como sería la reestructuración, a qué áreas afectaría o en que consistiría con precisión dicha desvinculación. Es más, de la prueba aportada en el proceso por la demandada consistente en el informe de Estado de Resultado de la sociedad Desarmaduría Copiapó a agosto de 2020, ella dice relación con bajas en la productividad o



pérdidas de la sociedad, pero no con un proceso de reestructuración. Así, parece ser que en instancias judiciales la empleadora pretende levantar una hipótesis de situación financiera dificultosa de su parte para justificar con ello la desvinculación, pero lo cierto es que en la carta de despido enviada, no se invoca dicha causal, lo que trae como consecuencia lógica que el despido practica carece de justificación.

En consecuencia, la causal invocada no cumple de manera satisfactoria el estándar mínimo exigido por el legislador de conformidad a lo establecido en el artículo 454 N° 1 inciso segundo del Código del Trabajo, en cuanto a describir con claridad los presupuestos facticos en que fundamenta su decisión, dejando de esa manera en indefensión a la trabajadora demandante, privándola de la posibilidad de ejercer su derecho a defensa respecto de los hechos en que se justifica su despido, ya que los hechos invocados en la comunicación de despido tienen un carácter demasiado genérico y vagos, sin especificar ni explicar de manera concreta en que habría consistido la reestructuración de la compañía en que desempeñaba funciones la trabajadora demandante, más aún teniendo presente lo ya señalado en cuanto a que la prueba aportada para justificar su despido, iba en sentido diverso incluso a la escueta justificación fáctica entregada.

Por todas estas consideraciones y análisis de la prueba rendida, no hacen sino hacer concluir a este tribunal que el despido del que fue objeto la trabajadora demandante fue injustificado y, por ende, procederá ordenar el pago del recargo legal de un 30% respecto de la indemnización por años de servicios;

NOVENO: Que respecto a la fecha de inicio de la relación laboral, debemos señalar que existe una discrepancia por cuanto la parte demandante indica haber comenzado a prestar funciones el día 3 de noviembre de 2017, y la demandada alega que ello ocurrió en el mes de marzo de 2018. Pues bien, al efecto, y como se indicó en el considerando séptimo numerales 1 y 2, el contrato de trabajo señala que la trabajadora comenzó a prestar servicios con fecha 3 de noviembre de 2017. Tampoco se señala, como indica la demandada, que se trate de una promesa de contrato, pues si bien tiene una cláusula de vigencia, el mismo documento reconoce esa fecha como la de inicio de los servicios.

Esto se corrobora por la conversación de Whatsapp ya señalada, en que se lee que con fecha 2 de junio de 2020 la actora le representó a “Felipe Jefe” que había recibido su finiquito, pero que el mismo estaba calculado desde marzo de 2018, no desde noviembre de 2017, dando a entender el reclamo a este respecto, pues independiente de que la trabajadora necesitare un permiso especial para trabajar otorgado por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior – sobre el que ninguna prueba acompañó al respecto ninguna de las partes – nada obsta a que en los hechos, la trabajadora haya prestado servicios desde dicha fecha, y por tanto en esta sede, será desde ese momento en que se deberán pagar por sus indemnizaciones.

En consecuencia, interpretando la prueba a este respecto bajo el principio *pro operario* que rige esta sede, se ha acreditado que la actora comenzó a prestar servicios desde el día 7 de noviembre de 2017, iniciándose en dicha fecha la relación laboral;



DÉCIMO: Que debemos en consecuencia, siguiendo con las acciones ejercidas, determinar la base de cálculo sobre la cual se ordenará el pago de las prestaciones reclamadas. Así, como ya se indicó en el considerando séptimo numeral 4, se acreditó con las liquidaciones de sueldo, una remuneración ascendente a \$537.425, cifra a la cual, conforme a las alegaciones de la actora, debería incrementarse en virtud de pagos realizados por mano que incrementarían dicha base de cálculo.

Respecto a esta alegación de la actora, se acompañó como prueba una transferencia realizada el día 17 de abril de 2020 realizada a la actora por don Carlos Felipe González Carreño, la que consta en la cartola de la cuenta RUT N° 0026160634, que comprende el período de tiempo desde el día el 23 de marzo del año 2020 al 17 de abril del año 2020, pero lo cierto es que el señor Gonzalez es el representante legal y jefe directo de la actora como ella misma reconoce, por lo tanto, no es posible atribuirle a esta única transferencia el carácter de sobresueldo y pago periódico, por no acreditarse su periodicidad por una parte, y no entregarse mayores antecedentes de su motivo. Además, el monto no es de \$100.000 como señala la actora en su demanda, y que al momento de absolver posiciones la actora señaló que ascenderían a \$200.000 aproximadamente y que ellas correspondían a una parte fija y una parte variable a comisiones.

Tampoco otorga mayor luz al respecto el audio acompañado signado como PTT-20200513-WA0001, por cuanto en él, la persona que habla – que no se identifica – señala que “...está viendo lo de las comisiones, que no sabe si va a dar...”, por lo que tampoco es posible atribuirle el carácter de reconocimiento de pago que pretende otorgársele., lo que se ve corroborado por el testigo de las demandadas don Edgar Rojas Así, la única prueba a este respecto, resulta ser la declaración de la trabajadora prestada en la absolución de posiciones, la que por no verse corroborada con otra prueba, no entrega a este tribunal la magnitud probatoria para formar consentimiento a este respecto.

En consecuencia, lo solicitado por diferencias de remuneraciones será rechazado, al no acreditarse la entrega ininterrumpida de ellas como se señala en la demanda;

DÉCIMO PRIMERO: Que habiéndose acreditado que la relación laboral se inició el día 3 de noviembre de 2017 y que conforme se señaló en el considerando séptimo numeral 8, no existe pago de ninguna cotización de seguridad social ya sea de fondo de pensiones, salud ni seguro de cesantía entre los meses de noviembre de 2017 y febrero de 2018, así como tampoco existe ningún pago de cotización previsional de salud desde el mes de mayo de 2018 hasta el término de la relación laboral, menester será declarar que el despido practicado no ha tenido el objeto de poner término al contrato de trabajo, conforme lo estipula el artículo 162 del Código del Trabajo.

A mayor abundamiento, la carga de acreditar que las cotizaciones previsionales se encontraban pagadas es del empleador que practicó el despido, quién no ha cumplido con ella como ya se señaló, y por otra parte los documentos allegados vía oficio, desde las correspondientes instituciones previsionales, son prueba fehaciente de ello. Es más, las alegaciones de la parte demandada formuladas en la audiencia de juicio, en orden a que no constarían las cotizaciones de Fonasa por cuanto la actora se habría cambiado desde



dicha institución a Isapre, no hace más que agravar la culpa de la demandada, ya que si ello fue así, y estaba la sociedad en conocimiento de aquello, debió consignar las cotizaciones correspondientes en la institución de salud que correspondiera, y podría perfectamente haber aparejado a estos autos, la mencionada planilla de cotizaciones.

En consecuencia, se condenará a los empleadores que se señalarán a pagar las remuneraciones y demás prestaciones del contrato entre la fecha del despido, esto es, el día 30 de mayo de 2020, hasta la efectiva convalidación del mismo a razón de \$537.425 mensuales, conforme dispone el artículo 162 ya citado en sus incisos quinto al séptimo;

DÉCIMO SEGUNDO: Que en consecuencia, habiéndose determinado que la base de cálculo de las indemnizaciones asciende a la suma de \$537.425, y que la actora prestó servicios desde el día 3 de noviembre de 2017, se deberá condenar a la partes demandadas a la suma de \$537.425 por concepto de 1 año adicional de servicio, por haberse cumplido con el nuevo cálculo, una anualidad adicional a las 2 ya pagadas en el correspondiente finiquito, por existir 2 años, 6 meses y 27 días desde el inicio de los servicios hasta la fecha del despido, haciéndose lugar con ello parcialmente a lo solicitado en la demanda por este concepto.

Además, se adicionará la suma de \$537.425, a los años de servicio ya pagados, lo que totaliza la cantidad a pagar por concepto de incremento legal del 30% establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo, en la suma de \$483.682.

Por las mismas razones ya señaladas, habiéndose generado mayor cantidad de feriado, conforme al calculo efectivo del tiempo real trabajado, la correspondía a la actora en su finiquito el pago de la suma de \$968.593, a los que se deberá compensar el monto de \$553.385 ya pagado como feriado en su finiquito, lo que nos da una diferencia de \$415.208 que deberá ser pagada por las demandadas;

DÉCIMO TERCERO: Que en relación a en relación a la declaración de unidad económica entre las empresas demandadas Desarmaduría Copiapó Limitada, Súper Repuestos SpA, Carlos González Carreño, Cristian Méndez Carreño y Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Ltda., cabe tener presente que la parte demandante sustenta su acción en términos generales en la existencia de una relación laboral para todas ellas, la prestación de servicios indistinta y la recepción de instrucciones por parte de las mismas sin distinción, lo que es negado por las demandadas.

Que la controversia radica en primer lugar en determinar si las empresas y personas naturales demandadas en autos a la luz de lo establecido en el artículo 3° del Código del Trabajo constituyen una unidad económica, alegación que ha sido expresamente controvertida por la defensa de todas ellas Al efecto cabe tener presente, que con la publicación de la Ley N° 20.760 con fecha 09 de julio de 2014, fue introducida -entre otras-, las siguientes modificaciones a la norma recién aludida: “Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común.”;



DECIMO CUARTO: Que para acreditar la declaración que pretende la parte demandante como ya se razonó en el considerando séptimo en los numerales 5, 6 y 7, se corroboró que la actora recibía ordenes indistintas para ejecutar funciones para las 3 empresas demandadas, además, hubieron meses en que las cotizaciones previsionales le fueron pagadas por la Sociedad Súper Repuestos S.A. y que de esta misma sociedad – que no era su empleadora directa – recibió transferencias de dinero a la cuenta corriente personal de la demandante.

Adiciona a ello, la prueba consistente en la consulta situación tributaria de terceros de Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Limitada, fecha de consulta 6 de julio del año 2020, la consulta situación tributaria de terceros de Súper Repuestos SpA, fecha de consulta 6 de julio del año 2020, y la consulta situación tributaria de terceros de Desarmaduría Copiapó y Cía. Limitada, fecha de consulta 19 de febrero del año 2021, en la que se aprecia que las sociedades comparten un giro común, repitiéndose en ella el código de actividad 453000 relativo a venta de accesorios de vehículos, precisamente la actividad en la que se desempeñaba la demandante de autos. Esto se ve corroborado además por el oficio de unidad económica evacuado por la Dirección del Trabajo.

Por su parte el Estatuto actualizado de Super Repuestos SpA de fecha 20 de febrero del año 2021, donde consta que sus representantes legales son los señores Carlos Felipe González Carreño y don Cristián Mauricio Méndez Carreño, este último quién a su vez es socio y representante de la sociedad empleadora directa conforme da cuenta la copia de escritura de constitución de la sociedad Desarmaduría Copiapó y Cía. Ltda.

Además, en la escritura pública de fecha 15 de diciembre del año 2017, otorgada ante el notario público don Iván Torrealba Acevedo de compraventa con mutuo hipotecario en la cual la sociedad Súper Repuestos S.A., esta última, quién comparece representada por don Cristián Mauricio Méndez Carreño, adquiere la propiedad ubicada en la calle Nueva Valdés comuna de Santiago, y en su cláusula vigésimo novena comparece la sociedad Desarmaduría Copiapó Ltda., también representada por don Cristián Méndez Carreño, constituyéndose en fiador y codeudor solidario para garantizar la operación que en ella se realiza. Se debe destacar que es en esta misma propiedad en la el testigo de la demandante señor Kevin Canelón, señaló como una de las sucursales de las demandadas.

Todo ello, como se indicó no hace más que reforzar las conclusiones a que ya se habían arribado en el considerando séptimo relativo al modo de trabajar de la actora, y las instrucciones que recibía respecto de todas las sociedades demandadas;

DECIMO QUINTO: Que del mérito de los antecedentes documentales antes analizados, se ha podido demostrar el manejo como un solo empleador por parte de las sociedades demandadas, bajo el control al menos direccional de los demandados personas naturales, y ello ha permitido poder adquirir la convicción que las 3 empresas demandadas si conforman una unidad económica al tenor de lo establecido en el artículo 3° del Código del Trabajo, evidenciando una dirección laboral común a través de la persona de don Carlos Felipe González Carreño, quién entregaba en el día a día las directrices de funcionamiento e instrucciones a la actora, respecto las actividades diarias, como ya se explicitó en los considerandos séptimo y décimo cuarto.

De todos modos, esta actuación como unidad económica solo se ha podido acreditar respecto de las sociedades demandadas, es decir Desarmaduría Copiapó Ltda., Súper Repuestos SpA y Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Ltda., ya que respecto de las



personas naturales señores Carlos González Carreño y Cristián Méndez Carreño, si bien consta que ambos ejercen la representación legal y direccional de las empresas, no se ha acreditado en autos que en la práctica ellos actúen como empleadores, es decir que se haya exigido trabajo para ellos en calidad de personas naturales, y que se haya entregado instrucciones en dicho sentido, o bien que se hayan beneficiado del mismo en los términos del artículo 3 del Código del Trabajo.

En atención a los fundamentos expuestos, la acción de unidad económica o empleador común del artículo 3° del Código del Trabajo, será acogida respecto de las sociedades Desarmaduría Copiapó Ltda., Súper Repuestos SpA y Sociedad Automotriz Méndez y Cía. Ltda., condenándose solidariamente a dichos demandados al pago de las indemnizaciones y prestaciones que se indicarán en lo resolutivo;

DÉCIMO SEXTO: Que a pesar de la declaración de unidad económica que se ha realizado parcialmente, ninguna prueba ha sido aportada al efecto para considerar que existe en este caso un subterfugio de las empresas demandadas para alterar su patrimonio o individualización, o bien para eludir sus obligaciones laborales, conforme los parámetros entregados por el artículo 507 N° 3 del Código del Trabajo. En consecuencia, la acción judicial en lo que a este punto respecta, será rechazada;

DÉCIMO SÉPTIMO: En relación a la solicitud de la devolución del saldo aportado por el empleador como aporte a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), en virtud de lo expuesto en el artículo 13 de la Ley 19.728 que otorga la facultad de deducción de lo aportado por este en la cuenta individual de cesantía, este sentenciador estima que ella es una facultad legal establecida por la norma por el hecho de invocarse dicha causal para poner término a los servicios, pero no se condiciona en ella a la calificación de la justificación o no de la misma causal, la que deberá ser realizada por el Juez del Trabajo, y en caso de declaración de injustificación, sancionar con los incrementos establecidos en el artículo 168 del Código del Trabajo, y las demás prestaciones que correspondan, no encontrándose entre ellas la solicitada;

DÉCIMO OCTAVO: Que con respecto a las causas que se solicitaron tener a la vista, a saber los RIT T-1074-2020, RIT O-4921-2020 y RIT O-4889-2020 todas del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en nada aportan a la cuestión decidida y ninguna valoración se podrá hacer de ellas, por haberse alcanzado a acuerdo en las 2 primeras y en la última sin realización de la audiencia de juicio, no existiendo antecedentes relevantes que se puedan desprender de ellas que modifiquen lo decidido.

Por su parte respecto a la solicitud de hacer efectivo el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo respecto de los contratos de cuenta corriente mercantil, este tribunal no hará lugar a ello, por no ser dichos contratos documentos que legalmente a la luz de la normativa laboral, deban obrar en poder de las demandadas;

DÉCIMO NOVENO: Que con respecto a la demás prueba rendida en autos, a saber Cartola Histórica Cuenta RUT N° 0026160634, que comprende el período de tiempo desde el 20 de abril del año 2020 al 04 de mayo del año 2020, la consulta situación tributaria de terceros de Cristián Méndez Carreño, fecha de consulta 6 de julio del año 2020, las fotografías de poleras de Desarmaduría Copiapó y Cía. Limitada y de Súper Repuestos



SpA; Balance clasificado del año 2019 y balance general del año 2020 ambos de la demandada Super Repuestos SpA; Comprobante de pago de finiquito de doña Yusbely Agüero, y los comprobante de pago de remuneraciones de los meses de enero, febrero, marzo y abril 2020, los mismos no serán valorados por no alterar en nada las conclusiones arribadas, siendo solamente documentos sobreabundantes respecto de las decisiones ya reseñadas;

VIGÉSIMO: Que no se condenará en costas a las partes demandadas por no haber resultado totalmente vencida.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 161, 162, 163, 168, 172, 415, 420, 423, 425 a 432, 446 a 462 y 507 del Código del Trabajo; se resuelve:

I.- Que, se **ACOGES PARCIALMENTE**, la demanda interpuesta por doña Yusbely Agüero Espinoza, en contra de Desarmaduría Copiapó Limitada, declarándose en consecuencia que:

a) Que la actora comenzó a prestar servicios el día 3 de noviembre de 2017;

b) Que el despido que fue objeto con fecha 30 de mayo de 2020 es injustificado condenándose en consecuencia a la demandada antes individualizada a pagar a la actora por diferencia de indemnización por años de servicios por la suma de \$537.425, recargado en un 30% la totalidad de dicha indemnización, de conformidad a lo establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, en la suma de \$483.682

c) Que se adeuda la suma de \$415.208 por concepto de diferencia de feriado legal y proporcional;

II.- Que el despido practicado no ha tenido el efecto de poner termino al contrato de trabajo, y en consecuencia la demandada deberá pagar las remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen entre la fecha del despido, esto es, el día 30 de mayo de 2020, hasta la efectiva convalidación del mismo, tomando como base la remuneración de \$537.425 mensuales;

III.- Que las empresas demandadas DESARMADURIA COPIAPO LTDA., SUPER REPUESTOS SpA y SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MENDEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, constituyen una unidad económica en los términos del artículo 3° del Código del Trabajo, quedando obligadas de manera solidaria al pago de las indemnizaciones y prestaciones ordenadas pagar en los numerales precedentes;

IV.- Que las sumas ordenadas pagar en forma precedente, deberá serlo con los reajustes e intereses que establece en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.



V.- Que se rechaza la demanda respecto de los demandados Carlos Felipe González Carreño y Cristian Mauricio Méndez Carreño;

VI.- Que, se rechaza, en lo demás el libelo;

VI.- Que no se condena en costas a las partes demandadas por no haber resultado totalmente vencidas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT O-4914-2020

RUC 20-4-0286085-6

Dictada por don MAURICIO SEGOVIA ARAYA, Juez Suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago



HETDXYWXMB

A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>